

“Buscando una vida vivible”: la migración forzada de niños de Centroamérica como práctica de fuga de la “muerte en vida”

Amarela Varela Huerta*

La hipótesis que guía este trabajo es que las violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes migrantes mesoamericanos es una de las dimensiones fundamentales del fenómeno de migración forzada en la región. Así pues, en este trabajo abordaré la migración de niños centroamericanos como estrategia de desobediencia al régimen global de fronteras, una expresión concreta de migración forzada protagonizada por los llamados “menores migrantes no acompañados” que buscan en el éxodo el derecho a una vida vivible.

Introducción

Nos interesa introducir al lector a este breve recorrido por lo que la prensa regional llamó “crisis humanitaria de los niños migrantes”, con la hipótesis de que dicha “crisis” es producto de la gestión securitaria de la migración que intentó con ello demeritar la condición de migración forzada de la población centroamericana en general.

Esta gestión securitaria de la migración, un modelo que entra en vigencia después de los atentados terroristas en Nueva York en septiembre de 2001, basada en una lógica de externalizar las políticas de seguridad nacional que se le imprimieron

al control poblacional en Estados Unidos al sur de territorio y a los territorios fronterizos entre México y Guatemala.

La llamada “crisis humanitaria de los niños migrantes”, que comenzó a tener cobertura mediática en junio de 2014, desató una ola de reacciones, desde las de los jefes de gobierno de los países involucrados hasta la de la sociedad civil organizada del continente. Pocas veces las voces de los propios niños, adolescentes y jóvenes protagonistas de esta arista de la crisis humanitaria aparecieron publicadas y en ninguno de los discursos institucionales hicieron eco los argumentos de estos migrantes.

En este texto, de corte exploratorio e inscrito en un proceso de investigación de largo aliento sobre las causas del éxodo migratorio, las condiciones de tránsito y las consecuencias humanas de la migración de centroamericanos

hacia el norte del continente, pretendemos contextualizar dicha crisis, descontextualizarla de lo coyuntural y explicar escuetamente por qué dicha crisis se inscribe en un fenómeno más complejo y acuciante: el éxodo forzado de las poblaciones centroamericanas que, con su migración, buscan huir, fugarse de las violencias del Estado, del mercado y patriarcales que sobre todo mujeres y niños padecen cuando intentan la migración para conseguir una vida vivible fuera de los lugares en los que nacieron y en los que no pueden seguir creciendo.

En el texto, el lector podrá reconocer las causas de este éxodo forzado de los pequeños migrantes, así como las principales características que la migración forzada de menores no acompañados involucra específicamente para la región. Se trata de un ejercicio de análisis construido de trabajos de investigación canónicos

* Profesora-Investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Correo electrónico: <amarela.varela@uacm.edu.mx>.

en la materia, sumados a las voces de organizaciones de derechos humanos y de migrantes. El texto está dividido en tres apartados, en el primero de ellos se explica el escenario centroamericano, el tiempo y el espacio en el que este fenómeno de migración forzada está tomando lugar; en un segundo apartado abordamos las subjetividades de estos niños y adolescentes migrantes que transitan hacia el norte buscando una vida vivible. En el tercer apartado reflexionamos sobre las diferencias y coincidencias en las estrategias de organizaciones de derechos humanos y de migrantes para responder a esta “crisis de los menores migrantes”.

El escenario: Centroamérica y la neoliberalización de la violencia

Si bien hay indicios de migración de menores en la región mesoamericana desde la época colonial, la presencia de niños jornaleros en las plantaciones mesoamericanas¹ es una de las características constitutivas de la agroindustria desde hace por lo menos dos siglos (Escobar, 2008); la migración de niños mexicanos y centroamericanos cobró especial relevancia para los gobiernos, las instituciones académicas y la sociedad civil en general después de que sus dimensiones y las condiciones de vulnerabilidad que la caracterizan resonaron en medios de la región en junio de 2014, cuando diversos organismos la caracterizaron como “masiva” y “descontrolada” (Centro Pew, 2014).

De pronto, los niños y adolescentes mesoamericanos ocuparon las portadas de los principales diarios en el continente americano, con imágenes aludiendo a su detención, infantes subidos en La Bestia o “tren de la muerte”, como llaman los migrantes y las organizaciones de migrantes a la red de ferrocarriles privados que atraviesan el territorio mexicano desde Chiapas hasta el norte del país y que cada año transporta, según diversos informes estatales y no gubernamentales, entre 400 y 500 mil migrantes centroamericanos a través de “la frontera más grande del mundo” (Escobar, 2008), es decir, la trayectoria que implica cruzar México por tierra para llegar a Estados Unidos.

¹ Según la Real Academia de la Lengua Española, Mesoamérica es la zona cuyos límites se encuentran entre una línea que corre al norte de la capital de México, y otra que corta América Central por Honduras y Nicaragua, hasta la península de Nicoya, en Costa Rica. Compuesta por nueve estados al sur de México y los territorios de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y Honduras.

Estas imágenes apelan a la pregunta: ¿qué obliga a un niño a subirse a La Bestia? ¿De qué huyen las madres adolescentes que llevan en brazos a sus hijos montadas en La Bestia? Según el antropólogo Abbdel Camargo, las causas que sostienen la decisión de los menores migrantes de partir son “[...] objetivas y estructurales, y en ellas se pueden identificar tres principales: 1) por el contexto de violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana prevaliente en la zona; 2) por razones económicas, derivadas de las desigualdad social y precariedad económica; y 3) por los movimientos encaminados a la reunificación familiar” (Camargo, 2014: 38).

Desde nuestra perspectiva, estos tres motivos centrales pueden traducirse en que esos niños huyen del juvenicidio que representa quedarse. Esta categoría nos resulta central para emparentarla cuando se discute el tema de la violencia con rostro juvenil como “pandemia” en Centroamérica. Mientras que la categoría de feminicidio (Berlangua, 2013) goza de un pozo argumentativo ya instituido incluso en instrumentos legales, producto de un intenso trabajo colaborativo entre feministas de todo el mundo, la categoría de juvenicidio apenas está siendo desarrollada por parte de los juvenólogos o estudiosos de la juventud, que están trabajando bajo la premisa de construir un dispositivo discursivo igual de útil, epistemológica y políticamente, que el feminicidio. Por juvenicidio se propone entender “asesinatos de jóvenes pobres, hombres en su mayoría” (Cruz Sierra, 2014; Valenzuela Arce, 2012). Más adelante iremos a fondo sobre esta realidad, pero nos parece fundamental hacer énfasis en que esos niños y adolescentes están huyendo de convertirse en jóvenes en territorios donde serlo significa una sentencia de muerte.

¿Cuál es el escenario, en qué tipo de sociedad toman forma estos juvenicidios? La hipótesis de la que partimos es que las sociedades centroamericanas se rigen por pactos sociales políticamente contruados a partir de la marginalidad y la omisión. Y para entender estos escenarios en donde la omisión y la impunidad son una especie de política pública, proponemos pensar a los Estados mesoamericanos como sociedades gobernadas necropolíticamente².

² El filósofo e historiador camerunés Achille Mbembe propone completar la perspectiva foucaultiana del biopoder, la economía política del poder, con la noción de necropolítica o, lo que es lo mismo, una gubernamentalidad de la muerte en la que los sujetos no son sólo “cuerpos máquina” a los que la disciplina y las tecnologías del control convierten en existencias uniformes útiles al capitalismo. En las sociedades del control

Si echamos un vistazo a la vida cotidiana de quienes sobreviven en Centroamérica a la violencia gestionada por el Estado, descubriremos que la migración de centroamericanos es forzada y que los niños, adolescentes y jóvenes que se fugan de este escenario son supervivientes que se movieron del lugar de “muertos-en-vida” que el capitalismo les asignó para buscar en la migración el derecho a la vida “vivable”.

Concretamente, ¿cuáles son las causas que explican la migración de estos jóvenes y niños centroamericanos? Insistimos, en el informe más actualizado y riguroso que, desde nuestra perspectiva, existe en México, “Arrancados de Raíz” (2014), el antropólogo Abbdel Camargo establece que las motivaciones para iniciar el éxodo son múltiples, pero destaca de manera significativa más que la pobreza, las diferentes formas de violencia a las que estos niños están expuestos.

[...] los diversos motivos fueron agrupados en tres principales causas de salida: violencia, razones económicas y reunificación familiar. Como resultado se tiene que, en promedio, 48.6% de los NNAS entrevistados identificaron una situación asociada a un tipo de violencia –golpes, intimidaciones, amenazas e inseguridad– como causa de salida, evidenciando el grave nivel de desprotección en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en esta región del mundo. [...] Si bien existen elementos comunes entre los tres países, el presente estudio encontró que son los nacionales de Honduras quienes en mayor medida están huyendo de la violencia e inseguridad en sus países de origen. Se halló que un 59.5% de los NNAS hondureños se encontraban en esta situación; seguidos de los salvadoreños con 40% y guatemaltecos con 33.3% en promedio. Estos datos evidencian que la violencia tiene un peso significativo en la decisión de salir del país de origen en los tres países (Camargo, 2014: 15).

Así pues, el éxodo masivo de la población centroamericana hacia el norte del continente es generado por las condiciones sociales de precarización de todos los ámbitos de la vida (trabajo, derechos sociales, políticos, económicos,

necropolítico, los sujetos no son sólo cuerpos máquina que se autovigilan y autocastigan para ser productivos, sino que, para la economía de guerra del Estado de excepción que gobierna mediante perversas relaciones de poder, los sujetos son además de maquínicos, cuerpos desechables.

culturales, liberalización de la violencia) que padecen en sus países de origen, pero, sobre todo, según los diversos estudios consultados, obedece a el escenario de neoliberalización de la violencia, que para los niños, adolescentes y jóvenes se concreta en la acuciante realidad: quedarse significa trabajar en una maquiladora por 90 dólares mensuales y trabajar hasta 80 horas semanales³ o sumarse a alguna de las maras que acechan sus barrios.

Los menores migrantes que protagonizan la “crisis” que nos ocupa están huyendo de la violencia del mercado, del terror de las maras y de la indefensión que el Estado administra. Huyen también de la violencia doméstica. Se fugan⁴ para seguir vivos.

Por eso, abordaremos a continuación las características de las violencias de las que huyen los migrantes centroamericanos, las cuales sólo se explican en forma diacrónica y sincrónica; es decir, a partir de una realidad histórica de larga data.

Esta violencia de Estado es la que ha propiciado 79 mil homicidios registrados en los últimos seis años y un promedio de 33 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2008⁵; de ahí que todos los medios de información caricaturicen a Centroamérica como “la región más violenta del mundo” (Gabriel, 2010).

Al respecto, Serrano y López (2011) señalan que en El Salvador, Guatemala y Honduras los índices de crimen y violencia se encuentran entre los tres más altos de América Latina. En los demás países de la región –Costa Rica, Nicaragua y Panamá– los niveles de crimen y violencia son significativamente menores, aunque registran un aumento sostenido de los índices de violencia en años recientes. Para dimensionar estas cifras y descentrarlas del uso justificativo de la urgencia de planes securitarios regionales, hay que decir que El Salvador tiene el índice de homicidios más alto de América Latina (58 por cada 100 mil habitantes), y que junto con Guatemala y Honduras, con índices de homicidios de 45 y 43 por cada 100 mil habitantes, respectivamente, se en-

³ Según datos de organismos hondureños de derechos laborales

⁴ La noción del derecho de fuga fue desarrollada por el sociólogo italiano Sandro Mezzadra en un libro ya canónico en el que explica por qué el agenciamiento de los sujetos que migran debe comprenderse como un tipo de acción colectiva, como un desafío que los migrantes construyen contra el capitalismo. El texto está disponible para su libre descarga en <<http://www.traficantes.net/libros/derecho-de-fuga>>.

⁵ Según datos del Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (IDHAC, 2009-2010), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

cuentra entre los primeros cinco del continente. El índice de homicidios para Centroamérica en general es de 35.4 por cada 100 mil habitantes, demasiado alto comparado con el promedio para toda América Latina, que es de 20 por cada 100 mil (Serrano y López, 2011).

En 2008, los países centroamericanos con mayor número de asesinatos fueron los nortños: Honduras, con una tasa de homicidios registrada de 58 por cada 100 mil habitantes; El Salvador, con 52; Guatemala, con 48; y Belice, con 32.

Respecto a las explicaciones de por qué es relevante explorar el fenómeno de la violencia en esta coordenada geopolítica, Serrano y López (2011) proponen las siguientes hipótesis. En primer lugar habría que ubicar al narcotráfico de la región norte de Centroamérica como el factor promotor del terror. Según un informe del Woodrow Wilson Center de junio de 2013 (citado en Sánchez, 2015), la transnacionalización de los cárteles mexicanos de la droga hacia los vecinos centroamericanos es absoluta, siendo el cártel de Sinaloa y Los Zetas los que controlan los territorios de producción, distribución y corredores de mercancía en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Estos tentáculos expandidos en territorio mesoamericano de los letales cárteles mexicanos entraron en parentesco con otras estructuras de larga data en la región: las maras, ejércitos (sobre todo de jóvenes y niños) emparentados con otro proceso migratorio, el de la década de los ochenta, posterior a las guerras civiles en las que fueron sumidas las sociedades centroamericanas luego de la intervención, principalmente norteamericana, para frenar y revertir los intentos de proceso de liberación nacional. Ante la violencia de esos tiempos, miles de personas, entre ellos niños, adolescentes y jóvenes, huyeron hacia el norte en un proceso de abierto desplazamiento forzado.

Al llegar a las megalópolis norteamericanas, los desplazados centroamericanos se encontraron con un complejo entramado que incluía una diversidad de formas de pandillerismo de comunidades racializadas. Para sobrevivir en “el barrio” había que compartir la calle con bandas de norteamericanos de “primera generación” de origen mexicano, asiático o africano. Así es como se crearon las multicitadas Mara Salvatrucha y Barrio 18, maras, pandillas, grupos de jóvenes que violentaban para sobrevivir en la meca del capitalismo, generando estrategias de pertenencia basadas en la puesta en escena de formas de violencia que habían visto en las guerras contrainsurgentes, traducciones urbanas del terror del que ellos y sus padres huyeron.

En poco tiempo, estos jóvenes mareros se hicieron del control de barrios enteros en ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Ante este escenario, el gobierno norteamericano, inmiscuido en crisis internacionales –pues se demostró su papel protagónico en las guerras contrainsurgentes en Centroamérica–, optó por la deportación en masa de estos jóvenes mareros; con ello, trasladó la violencia marera a las calles de las ciudades originarias de los padres de estos jóvenes. Los barrios pobres que recibieron a esos mareros deportados en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua albergaron de pronto a 100 mil jóvenes, buen número de ellos nacidos en Estados Unidos y, por tanto, monolingües, angloparlantes.

Así es como en la década de los noventa estos jóvenes, tratados como cuerpos desechables por el gobierno y la sociedad norteamericana, aterrizaron en ciudades que sólo conocían por la melancolía con la que los padres las evocaban y comenzaron a tratar a esas sociedades como otros millones de cuerpos desechables. Esto, además de la violencia generalizada contra los jóvenes pobres, generó lo que ahora se conoce como las maras, brazos armados de esos cárteles transnacionalizados, compuestos por jóvenes de entre 15 y 34 años de edad que constituyen la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio; las maras están conformadas en su mayoría por hombres, aunque no de forma exclusiva. Aproximadamente hay 900 maras que operan en Centroamérica, con un estimado de 70 mil integrantes.

Este fenómeno en el que los jóvenes ejercen la violencia y son además sus principales víctimas es lo que se considera “juvenicidio” y está sucediendo ante los ojos de todas las sociedades y los gobiernos mesoamericanos. Sobre las maras se ha escrito mucho en Centroamérica, pero en México y el norte del continente prevalece una perspectiva canibalizante en torno a este problema. Retomando el trabajo de Carolina Escobar (2008), este complejo fenómeno de juvenicidio pudo haber tenido dos orígenes, el de los movimientos migratorios antes descritos o bien la propia violencia institucional en los países de América Central, siendo la creación de maras la respuesta que los jóvenes de barrios pobres construyern como contrarrelato de esa violencia estatal y estructural⁶.

⁶ Del trabajo de Escobar recuperamos el ejercicio pionero de Deborah Levenson (*Por sí mismos*, 1996) en el que analiza el surgimiento de las maras en Guatemala y las caracteriza como una respuesta de los jóvenes a la violencia instituida en contra de ellos.